



"2026, Año de la Educación para la Construcción de la Paz"

COMUNICADO 1694

ELEVA CONGRESO DEL ESTADO A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A SER BUSCADO

- **El dictamen de la iniciativa presentada por la diputada Alejandrina Corral fue aprobada por unanimidad**

Mexicali, B.C., martes 3 de febrero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos en materia de desaparición de personas, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California aprobó el dictamen 73 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto a la iniciativa que reforma la Constitución Política local.

La propuesta presentada por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, incorpora a nivel constitucional el derecho de toda persona a ser buscada, específicamente en los casos de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares u otras formas de privación ilegal de la libertad, estableciendo que esta obligación corresponde al Estado y debe ejercerse conforme a lo que determinen las leyes aplicables.

La inicialista subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la existencia del derecho a la búsqueda, como una obligación absoluta para todas las autoridades, estableciendo que la búsqueda debe ser inmediata, exhaustiva, continua y con perspectiva de género.

En ese sentido, la Comisión analizó y dictaminó la iniciativa, concluyendo que es jurídicamente procedente y reconoce que la desaparición de personas constituye una de las problemáticas más graves de la entidad en materia de derechos humanos, con un impacto directo en las víctimas y sus familias, lo que justifica elevar este derecho a rango constitucional.

Por lo que, con la aprobación del Pleno de esta reforma, se consolida un marco jurídico más sólido en Baja California para la protección de las personas desaparecidas y sus familias, al reconocer de forma explícita el derecho humano a ser buscado y fortalecer la responsabilidad del Estado frente a este fenómeno social.

Posteriormente el documento será turnado a los Ayuntamientos del Estado para el trámite correspondiente y, de obtenerse la aprobación de la mayoría de los Cabildos, se procederá a realizar la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.